

**MEMORIA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO ABIERTO 13/2025 CUYO OBJETO ES SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE INVENTARIO DETALLADO Y GEOLOCALIZADO DE EQUIPOS SANITARIOS Y PLANES DE GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ, CANTOBLANCO Y CARLOS III.**

Por parte del Servicio Técnico del Hospital, se promueve la tramitación del Procedimiento Administrativo para la contratación arriba referenciada, a través de un contrato administrativo que a continuación se detalla:

**1.- Justificación de necesidad e insuficiencia de medios.**

La realización de éste contrato es de necesidad para dar cumplimiento a la Ordenanza de Gestión y Uso Sostenible del Agua en Madrid: Publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Nº 146 de fecha 21 de junio de 2006, que establece las directrices para el uso racional del agua en grandes consumidores y la necesidad de implementar planes de gestión sostenible del recurso hídrico, en los Hospitales de referencia y en consonancia con de la Ley de Contratos en el Sector Público.

No disponiendo el Hospital de los recursos ni personales ni técnicos necesarios para su ejecución por la alta especialización técnica que se requiere para su realización, es por lo que se considera necesaria la contratación del servicio, asegurando su ejecución en las mejores condiciones de fiabilidad y disponibilidad, por lo que es necesario la licitación del mismo para conseguir una actividad asistencial de calidad, propia de una Institución Sanitaria pública y acorde con los principios de calidad y compromiso con los usuarios demandantes de la misma.

**2.- Justificación de solvencia y justificación de adscripción de medios.**

En relación al articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece como criterios exigibles de solvencia económica y financiera y técnica; y adscripción a la ejecución del contrato de medios, siendo estos proporcionales al objeto del contrato, permitiendo la libre concurrencia en el procedimiento de contratación y fomentando la participación en el mismo.

En cuanto a los criterios de solvencia económica y financiera la LCSP en su artículo 87 establece que ésta deberá acreditarse por uno o varios de los medios que se relacionan en dicho artículo, a elección por el órgano de contratación. De los

diferentes criterios para acreditar la solvencia económica y financiera se ha elegido la acreditación mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, puesto que se considera el más adecuado para asegurar la fiabilidad económica de los empresarios que licitan, en función de lo dispuesto en el artículo 87, punto 1, apartado a). Si por razones justificadas la empresa no está en condiciones de presentar la referencia solicitada, podrá acreditar su solvencia mediante el apartado 1.c) del precitado artículo

Asimismo, al tratarse de un contrato de un servicio, como criterio de selección se exige la acreditación de un volumen una vez y media el valor estimado del contrato.

En cuanto a los criterios de solvencia técnica, la LCSP en su artículo 90 establece que, en los contratos de servicios, deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se deberá acreditar según lo establecido en el punto 1. Apartado a) del precitado artículo, dado que se considera lo más adecuado para el servicio que nos ocupa, aportando cada uno de los licitadores relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos, puesto que permitirá estimar la conveniencia y capacidad técnica de los licitadores que se presenten para poder afrontar el objeto del contrato que se solicita.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante la presentación de al menos tres certificados dentro de los últimos tres años indicando importes, expedidos o visados por el órgano competente.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

### **3.- Condiciones especiales de ejecución y penalidades**

Al tratarse de un servicio, hace necesario establecer un régimen especial de penalizaciones y sanciones, que se detallan y explicitan en la Cláusula 1, Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para su aplicación en aquellos supuestos en que las prestaciones exigidas sean ejecutadas defectuosamente.

Las condiciones especiales de ejecución que se solicitan, están vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias y son compatibles con el derecho comunitario, asimismo, dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP.

#### **4.- Elección del procedimiento de licitación.**

Al objeto de promover la libre concurrencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública, así como el valor estimado del mismo, se considera adecuado elegir el Procedimiento Abierto Simplificado, en base al artículo 159 de la LCSP, por lo tanto, cualquier interesado podrá presentar una oferta, quedando excluida toda negociación con los licitadores de los términos del contrato.

#### **5.- Criterios de adjudicación**

A la vista de la Circular por la que se establecen los criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de fecha 17 de enero de 2020, se realizan las siguientes consideraciones:

Según manifiesta el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Las amenazas y obstáculos al Mercado Único”, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de abril de 2017, el objetivo de la contratación pública, “debe ser promover el principio de mejor postor frente al principio de postor más barato”. Esto no significa que la baja económica no deba ser relevante, pero no tener en cuenta criterios de juicio de valor puede provocar una tendencia a bajas cada vez mayores en el mercado, que conllevaría la no aportación de la inversión necesaria o un detrimento en calidad del servicio para la administración.

Para más abundamiento, el preámbulo de la Ley de Contratos del Sector Público, señala que uno de los dos objetivos que la inspira es el de conseguir una mejor calidad-precio y que para ello se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por el diseño de los criterios de adjudicación para obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Los criterios de adjudicación elegidos se consideran adecuados y convenientes para el objeto del contrato conforme a lo establecido en el artículo 145 en su apartado I de la Ley 9/2017 al establecer que *“la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”*

A este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas se han recogido las exigencias mínimas que debe cumplir la prestación, dejando a valoración aquellas cualidades complementarias que pueda ofertar el licitador.

En este sentido, los criterios elegidos, así como la ponderación aplicada, se consideran que son adecuados para obtener la mayor calidad al mejor precio. Para ello, se ha elegido el cálculo de la puntuación de la oferta económica una fórmula proporcional ya que atribuye la mayor puntuación a la oferta más baja y no discriminatoria al no atribuir márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas.

La ponderación asignada a la valoración de la oferta económica, 70 puntos, es la más adecuada en relación al resto de los criterios que valoran los aspectos cualitativos.

Respecto a los criterios de adjudicación de valoración automática, 15 puntos, tiene que ver con el objeto del contrato al considerar la minoración del plazo de ejecución, se trata de un criterio que permite lograr una prestación más ágil dada su calificación de urgente.

En relación a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, ponderados con 15 puntos, divididos entre 2 ítems que, están relacionados con el objeto del contrato, donde se evalúan aspectos que se consideran relevantes para las prestaciones a realizar. La valoración de estos criterios cualitativos por juicio de valor supondrá cuantificar cuestiones que consideramos fundamentales y que deben ser analizadas por personal técnicamente cualificado, especialista en la materia, valorando aspectos cualitativos que están por encima de los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas correspondiente, en consonancia con los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad a los que hace referencia el artículo 145.5 de la LCSP.

## **6.- Justificación de la exigencia de seguro.**

La prestación objeto del contrato y las consecuencias económicas que pueden derivar de las mismas, pueden tener una dimensión económica que justifica la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que permita garantizar los riesgos que dichas actividades entrañan. En virtud de lo anterior y tomando en consideración la complejidad técnica de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, se estima proporcionada.

En este caso se trata de un contrato de servicios que tiene por objeto la gestión integral de los residuos generados en el Hospital y Centros adscritos, desprendiéndose de ello que las actividades a desarrollar para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato son actividades profesionales y, por tanto, pueden generar riesgos causantes de responsabilidades profesionales, así como que los riesgos cubiertos por la póliza de seguro exigida están vinculados con el objeto del contrato al alcanzar riesgos por la ejecución del servicio.

Como apunta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 853/2019, de 18 de julio, que para la determinación del importe de responsabilidad civil que debe cubrir el seguro de riesgos profesionales, ha de reconocérsele al órgano de contratación un ámbito de discrecionalidad, puesto que es dicho órgano el que está mejor facultado para valorar los riesgos inherentes a la prestación del servicio. Asimismo, la Directiva 2014/24/UE en su artículo 58.3 al regular los criterios de selección, habilita a los poderes adjudicadores a exigir a tal fin “un nivel adecuado” de seguro de indemnización por riesgos profesionales; esto es, un nivel proporcionado o adecuado por referencia a la dimensión económica del contrato. Al respecto, exponer que el valor estimado del contrato es de 72.000,00 euros mientras que el importe exigido para el Seguro de Responsabilidad Civil en el apartado 16 de la Cláusula 1, del Capítulo I del PCAP es 7.000,00 €, por lo que se especifica plenamente adecuado y acorde con el objeto del contrato el importe exigido en la póliza de seguros.

## **7.- Justificación criterios de presunción de anormalidad**

En base al artículo 149 de la Ley 9/2017, se expone en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, para determinar la oferta incurso en presunción de anormalidad en el contrato que nos ocupa, se tendrá en cuenta de los criterios objetivos establecidos los relacionados con el coste, siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un único licitador se considerará que incurre en presunción de temeridad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 Uds. porcentuales.
- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición económica cuyo porcentaje exceda de 20 unidades por lo menos a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

Al tratarse de un criterio objetivo meramente computable por medio de una fórmula, el mismo es plenamente objetivo sin posibilidad de aplicar apreciaciones subjetivas al respecto, resultando una presunción de anormalidad acorde con el principio de igualdad aplicada de forma paritaria entre todos los licitadores.

## **8.- Justificación de la elección de los criterios de desempate**

Atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 147 de la LCSP, y según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la selección de los criterios obedece al establecimiento de una prelación que, estando adecuadamente vinculada

al objeto del contrato y resultando proporcional al mismo, solvente los empates que se produzcan entre dos o más ofertas en atención a criterios de compromiso social.

#### **9.- Justificación no división en lotes.**

La motivación de integrar la prestación objeto del contrato en un único lote se basa en el principio rector básico de la contratación pública, que es la eficiente utilización de los fondos públicos y, que conlleva, buscar la mayor racionalización en la ejecución de las prestaciones.

La integración de todos los servicios en un único lote permitiría optimizar los recursos y mejorar la eficacia y eficiencia del servicio objeto del contrato. Las prestaciones que forman parte del objeto del contrato constituyen "unidad operativa o funcional"; es decir, son elementos inseparables para el logro de una misma finalidad e imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que se pretende conseguir con la celebración del contrato.

La prestación de los servicios en dos o más lotes supondría un encarecimiento, con respecto al presupuesto estimado para una licitación en lote único, debido básicamente a la ausencia de sinergias operativas y organizativas, así como a la falta de eficiencia en los costes operacionales y de inversión. En este sentido, es muy importante señalar la limitación de los recursos de la Administración y la obligación de ésta a ser eficientes en la gestión de esos recursos. Hay que señalar dentro de este importante epígrafe que; la gestión centralizada y coordinada de los servicios implica economía de escala importante.

#### **10.- Justificación valor estimado y método de estimación de este.**

El método aplicado para calcular el valor estimado, es el establecido en el artículo 101 de la LCSP, es decir, importe de licitación, más prorrogas, más modificaciones sin impuesto valor añadido, si las hubiera, dando como resultado un importe de 72.000,00 euros.

#### **EL DIRECTOR GERENTE**

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEJOO RAFAELFERNANDO  
Fecha: 2025.04.25 19:14